

Texto transcrito por el Sr. Bulnes:

«Reclamaciones hasta 1862 de Gabriac y Wagner, cálculo, en francos	600,000
Reclamación en globo hecha á Juárez por Mr. de Saligny.....	60.000,000
Reclamación Jecker.....	75.000,000
Reclamaciones de diversos particulares.....	157,190,735
Suma fr.	292.190,735» 1

1 El Verdadero Juárez, pág. 65.

CAPITULO III

EL SR. JUÁREZ NO PUDO EVITAR LA INTERVENCION

ASIENTA el Sr. Bulnes que el Sr. Juárez debió fijar dos bases indeclinables para las reclamaciones extranjeras que le fuesen presentadas: 1.^a, no admitir sino las que tuvieran el carácter de legítimas; 2.^a, someterlas al fallo de comisiones mixtas. Conviene, no obstante, en que los diplomáticos podían no aceptar tales bases; él mismo ha dicho antes que los representantes de Francia declararon que «excluían toda intervención de comisiones liquidatarias.» Mas la no aceptación, añade, era, sin embargo, «plausible;» desde luego, Francia quedaba descartada, porque se le debían sólo \$200,000, que se podrían pagar sin esfuerzo alguno. Observaremos que Francia era puntualmente la nación reclamante más difícil de descartar con dinero, porque Napoleón no perseguía en realidad el pago de las reclamaciones de sus súbditos, sino fines complejos de carácter netamente político; el mismo Sr. Bulnes reconoce que esas reclamaciones formaban sencillamente un pretexto, bajo el cual ocultaba sus verdaderos móviles el monarca francés, quien trataba de poner en México un «dique á la ambición de los Estados Unidos,» esperaba hacerse pagar los gastos de la Intervención «en kilómetros cuadrados de territorio,» había resuelto «erigir un trono con apariencias de envidiable

para el Archiduque Maximiliano,» etc., etc. Es pueril, por tanto, creer, que con la mezquina suma de \$200,000 se habría dejado plenamente satisfecha la desmedida ambición napoleónica.

Aceptaremos por el momento, aunque sea absurdo, que Francia *pudo* quedar descartada fácilmente, y que el Sr. Juárez únicamente tenía que tratar luego con España é Inglaterra. Intencionalmente el Sr. Bulnes no toma en consideración todas las reclamaciones que hacía España al Gobierno de México, ó sean: 1.^a, una satisfacción por la expulsión del embajador español D. J. Francisco Acheco; 2.^a, reconocimiento del tratado Mon-Almonte; 3.^a, indemnizaciones por los asesinatos y vejaciones de que habían sido objeto los ciudadanos españoles en la República; 4.^a, abono de los intereses correspondientes á la demora que habían sufrido los acreedores españoles por la suspensión del tratado de 1853; 5.^a, devolución ó abono del valor de la fragata «Concepción,» é indemnización de perjuicios á sus propietarios cargadores. 1 El Sr. Bulnes reduce todas estas reparaciones al cumplimiento del tratado Mon-Almonte, asegurando que habría bastado para satisfacer á España, y al cual tratado llama «correcto» y elogia colurosamente, para desprender un nuevo cargo en contra del Sr. Juárez, que de una manera resuelta se negó siempre á reconocer dicho convenio. Como el Sr. Bulnes calla las razones que indujeron al Sr. Juárez á rechazarlo, las haremos conocer nosotros; fueron expuestas en el manifiesto dirigido á la Nación por el mismo Sr. Juárez

1 Arboleya, España y México, tomo II, págs. 63-64.

y todos sus Secretarios de Estado, el 30 de enero de 1860; decía así:

«El partido que, fundando los títulos de su poder en la defección de una parte de la fuerza armada, se ha establecido en la ciudad de México denominándose Gobierno de la República, sin embargo de que ésta le ha rehusado su representación en mas de dos años de lucha, ha concluido, en París, con el representante de S. M. C., en Septiembre del año anterior, un tratado injusto en su esencia, extraño á los usos de las naciones por los principios que establece, ilegítimo por la manera en que ha sido ajustado y contrario á los derechos de nuestra Patria.

«Estas calificaciones no son hijas del espíritu de partido, ni de las pasiones que éste engendra ó escita con frecuencia; no son tampoco el resultado de prevenciones indignas hacia la nación española. En la noble misión del Gobierno legal, en el noble y patriótico interés que le guía, no caben otros sentimientos ni otros deseos que el sentimiento de la justicia y el deseo del bien público. El análisis del documento indicado, las reflexiones que sugiere su lectura, bastan para acreditar la razón y la buena fe del mismo Gobierno en este particular, así como que se halla en la obligación de impedir que su silencio en este grave negocio pueda traducirse por una aquiescencia nacional.

«Ocho artículos contiene el convenio celebrado entre el representante de D. Miguel Miramón y el de la Reina de España. Por el primero de dichos artículos, se impone al Gobierno mexicano la obligación de continuar activando la persecución judicial y el cas-

tigo de los cómplices en los delitos cometidos en las Haciendas de San Vicente y Chiconcuaque, así como de los responsables de los sucesos, no menos deplorables, ocurridos en 1856 en S. Dimas, Estado de Durango.

«Según los artículos 2.º y 3.º, *aunque el Gobierno mexicano está convencido de que no ha habido responsabilidad de parte de las autoridades, funcionarios ni empleados* en los crímenes referidos, *consiente en indemnizar* á los súbditos españoles de los daños y perjuicios que se les hayan ocasionado á consecuencia de tales delitos. El Gobierno español consiente (art. 4.º) en que esas indemnizaciones no sirvan de base ni de precedente para otros casos de igual naturaleza. Francia é Inglaterra determinarán (art. 5.º) el valor de las indemnizaciones concedidas.

«Por el art. 6.º se restablece en toda su fuerza y en todo su vigor, el tratado de 12 de Noviembre de 1853, sin que se haga mencion alguna, ni incidentalmente, de la revision de créditos no españoles.

«Los daños y perjuicios (art. 7.º) por reclamaciones pendientes, serán arreglados por convenios ulteriores, y las ratificaciones de ese tratado se cangearán en París (art. 8.º) dentro de cuatro meses contados desde la fecha en que quedó firmado.

«Claramente se advierte que este convenio es humillante para nuestro país, ¿Cómo, á qué título y en virtud de qué derecho, consentir en las indemnizaciones estipuladas una vez que el Gobierno de D. Miguel Miramon declara que está convencido de la inculpa- bilidad completa de los agentes del poder público? ¿En qué se fundaría ese consentimiento? Si fuera un

principio de derecho de gentes la responsabilidad pecuniaria por perjuicios procedentes de delitos del orden comun, la nacion española no habría consentido en que se declarase que las concesiones hechas en ese punto por el Gobierno mexicano, no podrían servir de precedente en los casos futuros. Así, pues, su conformidad en esa declaracion, viene á probar que estaba persuadido de la injusticia de la demanda. Ni podía ser de otra manera, pues el representante de S. M. C. no podía ignorar que la obligacion de las naciones, respecto de los delitos del orden comun, directamente perjudiciales á los extranjeros, es perseguir y castigar, con sujecion á sus respectivas leyes, á los autores de aquellos y no la de conceder indemnizaciones pecuniarias por los daños que causen esos delitos; y es ciertamente extraño que la persona que figuraba en el convenio indicado como representante del supuesto Gobierno de México, haya admitido para su país, contra toda razon y contra todo derecho, obligaciones que la misma parte reclamante no vacilaba en declarar implícitamente infundadas; obligaciones que, si existieran, acabarían por reducir á la nulidad la independencia nacional. Para persuadirse de que esta última aseveracion es del todo exacta, bastará considerar que no está en la posibilidad de Gobierno alguno, cualesquiera que sean sus medios de accion, impedir la perpetracion de delitos del orden comun, y que si hubiera de conceder indemnizaciones á los súbditos de las naciones amigas por los perjuicios que de ellos se les originaran, acabaría por agotar su tesoro y todos sus elementos de subsistencia.

«¿Por qué, pues, ese partido que se permite arrojar

sobre sus adversarios aun la fea nota de infidencia á la Patria, se ha humillado hasta el grado de consentir en una exigencia á todas luces infundada? Las naciones sólo pueden acceder á justas solicitudes, pues de otro modo y toda vez que su honor sea comprometido, quedan expuestas al menosprecio y exigencias de las demas.

«Tampoco es decoroso para la nacion permitir que, á la sombra de la buena fe de los tratados, sea adulterada su deuda, ni que se trafique en su perjuicio con créditos que no pueden ser legalmente protegidos por aquellos. ¿Por qué el gabinete de Madrid no ha de consentir en la revision de esos créditos, cuando su buen nombre lo reclama, cuando la buena fe y el interes mismo de los créditos españoles de buena ley lo están exigiendo?

«Deber es, por tanto, del Gobierno legítimo, oponerse á que, por la condescendencia interesada de un partido sin conciencia, se sancionen abusos que en caso alguno pueden ser amparados por la ley de las naciones. La responsabilidad de los gobiernos no puede fundarse sino en la denegacion absoluta de justicia. Si México no se encuentra en este caso, no hay derecho para sujetarlo á una condicion despreciable á los ojos del mundo civilizado. La independencia, el honor, el buen nombre, los grandes intereses de un pueblo, no deben ser una ilusion para los mexicanos, sino una realidad respetable para propios y para extraños.

«Felizmente el tratado en cuestion no perjudicará los intereses de la República ni cederá en menoscabo de su buen nombre, porque ha sido ajustado y ratifi-

cado por personas no autorizadas para tratar en nombre de México. Un partido político, cuyo poder procede de una rebelion que la mayoría del país condena; una faccion que con las fuerzas sublevadas está impidiendo en las ciudades del centro la libre emision del voto público; un partido que ha inaugurado su poder manifestando que sería el gobierno de algunos departamentos, de algunas ciudades, segun el apoyo que la nacion quisiera darle; un partido, en fin, que, no obstante la horrible guerra que ha sostenido y fomentado durante tres años, valiéndose de todo género de medios, no ha podido adquirir la representacion que busca, no es ni puede ser el Gobierno de la República Mexicana.

«El Gobierno constitucional no expondrá aquí los títulos en que descansa su poder: ellos están en la ley y en la conciencia pública. Muy en breve tendrán término los motines que destrozan el seno de la patria y ponen en peligro su gloriosa independencia, y la autoridad legal se alzará incontrastable para salvar á ésta y para asegurar las garantías de nacionales y extranjeros.

«México está en la mejor disposicion para hacer á España estricta justicia, para concederle cuanto sea debido, para cumplir lealmente los tratados; pero quiere que esto sea conforme al derecho de gentes, y que la consideracion de su debilidad ó de su poder, de su buena ó mala organizacion política, no influya en el arreglo de sus diferencias. Quiere que se le estime como á un pueblo libre y soberano, y que el sentimiento de la justicia sea el que presida en todas sus estipulaciones: en una palabra, quiere que la buena fé y